Danza con castigos: los vaivenes de una historia de resistencias a la justicia restaurativa en materia penal adolescente

Dance with punishments: the swings of a history of resistances to
restorative justice in adolescent criminal matters

Ivonne Martínez Muniz*

* Licenciada en Sociología (Universidad de la República, Uruguay). Posgraduada en Políticas Sociales de Niñez y Adolescencia (Universidad Católica del Uruguay) y en Políticas Sociales (Instituto Universitario CLAEH). Candidata a doctora (Departamento de Sociología, Universidad de Salamanca, España). Trabaja para el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU).

✉ ivonnem69@gmail.com

RECIBIDO: [19.9.2018]

ACEPTADO: [24.11.2018]

Resumen

Este trabajo analiza la evolución de las medidas privativas y no privativas de libertad de adolescentes con infracciones a la ley penal en los últimos años en Uruguay. Se complementa con el análisis de entrevistas realizadas a informantes calificados pertenecientes al sistema penal adolescente (operadores sociales y jurídicos). Por último, identifica algunos obstaculizadores del desarrollo de las medidas no privativas de libertad, en particular, y de la justicia restaurativa, en general, que podrían aportar una clave explicativa de la opción por la privación de libertad como medida privilegiada por el sistema de justicia para la sanción adolescente.

Palabras clave: derecho penal, sanción penal, joven, Uruguay.

Abstract

This paper analyzes the evolution of custodial and non-custodial measures concerning criminal offenses committed by adolescents in recent years in Uruguay. It is complemented with the analysis of interviews to qualified informants belonging to the adolescent criminal system (social and legal operators). Finally, it

identifies some hindering factors to the development of non-custodial measures in particular, and to restorative justice in general, which could provide an explanatory key to deprivation of liberty as a privileged measure adopted by the justice system for adolescents' sanctions.

Keywords: criminal law, penal sanctions, youth, Uruguay.

Introducción

Suele ubicarse en el entorno de los años sesenta el inicio de la crisis del sistema penal y, más particularmente, la crisis de legitimación del encierro. La prisión como castigo, costosa e ineficiente, comenzó a verse más emparentada con la generación de problemas que con la producción de soluciones.

El 14 de diciembre de 1990 se aprobaron las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de Libertad, también conocidas como Reglas de Tokio. Autores como Tenenbaum consideran el surgimiento de las medidas alternativas como una propuesta del enfoque de derechos humanos en la administración de justicia para adolescentes, pero también entienden que se trata de un formato que coincide oportunamente con el retraimiento del Estado en las políticas sociales, con el consecuente traslado de responsabilidades hacia las familias (Tenenbaum, 2016).

Mucho antes de que las recomendaciones internacionales fueran incorporadas a la normativa nacional (lo que recién ocurrió en el año 2004), la institución rectora de infancia en el país en aquel momento, el Instituto Nacional del Menor (INAME), ya venía llevando adelante proyectos de atención a adolescentes que exploraban esta modalidad. En este sentido, cabe referir dos experiencias pioneras: el proyecto de libertad asistida del Movimiento Gustavo Volpe y el que fue el primer proyecto de sustitución de medidas en el país, que trabajó con adolescentes privados de libertad en La Tablada y Miguelete, implementado por el Grupo de Apoyo de DEAC.

En 1996 se verificó la expansión de las medidas no privativas, con la conformación del Programa de Medidas Socioeducativas de Base Comunitaria, PROMESEC. Este se integraba con proyectos oficiales y proyectos ejecutados en la modalidad de convenios con organizaciones de la sociedad civil, e incluía cuatro modalidades de intervención: libertad vigilada, libertad asistida, sustitución de medidas y mediación.

Finalmente, el Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado por la ley 17.823, de setiembre de 2004, recogió los estándares internacionales y consagró el principio de subsidiariedad de la privación de libertad, la cual, para la atención de los adolescentes en conflicto con la ley, debería ser empleada «como medida de último recurso y por el período de tiempo más breve que proceda».

Eso jamás ocurrió.

Lo que dice la teoría: Ventajas de diseño desde el punto de partida

La denominación *medidas alternativas a la internación* o *medidas no privativas de libertad* incluye un elenco de proyectos que abarcan desde la mediación hasta la libertad asistida, pasando por la reparación del daño y la sustitución de medidas.

En los tempranos noventa esta expresión era portadora de promesas de protección integral (doctrinariamente hablando), con sus ventajas de puro diseño al eliminar, desde el principio, tres problemas estructurales¹ de las instituciones totales. Estas ventajas de diseño radicarían en:

- Evitar la violación de los derechos humanos inherentes a las instituciones totales, lo que reduciría notablemente los niveles de violencia.
- Evitar la desocialización (o la socialización inconveniente), producto del desarraigo del adolescente de su medio y el montaje de las condiciones de laboratorio.
- Evitar la iatrogenia institucional (esto es, la multiplicación del perfil que se pretende *corregir*). En las instituciones de encierro la mayor socialización se da con los pares. La convivencia con los educadores es como máximo de 12 horas diarias, en tanto con los pares el intercambio es de 24 horas).

Las medidas no privativas de libertad, al trabajar la infracción con el joven en su propio medio, no necesita las *condiciones de laboratorio* que montan las instituciones de secuestro, lo que evitaría desocializaciones y contaría con mayores probabilidades de éxito en el proceso socioeducativo de trabajo conjunto con el infractor. Al trabajar con este en su propia comunidad, los proyectos educativos individuales serían más pertinentes, factibles y oportunos. Este constituyó un problema histórico en los internados, donde los educadores diseñaban proyectos educativos en función de las condiciones del establecimiento, que poca o nula relación guardaban con la historia de vida de cada joven.

Trabajando en el mismo marco de severidad-justicia —principio proclamado por la doctrina de la protección integral—, las medidas se presentaban como *sanciones alternativas*. Claramente jerarquizaban su componente de sanción jurídica, al tiempo que se postulaban como alternativas a la internación; por tanto, uno de sus aspectos clave era que estaban dirigidas a los mismos jóvenes (igual perfil y tipo de infracción) a quienes se sancionaba con privación de libertad (Liwnsky, 1991). Sus impulsores colocaban la propuesta en las antípodas de un esquema de progresividad sancionatoria y alertaban sobre los riesgos del *softcontrol*, en virtud del cual las alternativas a la

1 El adjetivo *estructurales* alude a que los problemas no radican en la gestión ni en los recursos, sino en la estructura misma de la institución; esto es, que la gestión ideal-óptima con los recursos ideales-óptimos también contaría con estos problemas.

privación de libertad podrían devenir en alternativas a la libertad, al expandir los mecanismos de control penal y llegar a los jóvenes que antes no eran captados por el sistema (Pavarini, 1995).

Quizás, o sin quizás, los primeros argumentos verdaderamente fermentales sobre los daños psicosociales del encierro provengan de los teóricos del interaccionismo simbólico. Así, los aportes de Bécker (versión 2018/1963), Sutherland (versión 2009/1949) y en particular Erving Goffman (versión 2001/1961), con sus estudios *anatómicos* de las instituciones totales, son referencias ineludibles. Despersonalización, desocialización, *carrera moral* del recluso, desdibujamiento de las barreras que separan los ámbitos de la vida en sociedad, la *rutina administrada formalmente*, los *ajustes secundarios* y la *violencia institucional* constituyen algunos de los conceptos derivados del estudio estructural y funcional del encierro. Pero, sin lugar a dudas, los desarrollos argumentales fueron llevados al *siguiente nivel* por los autores abolicionistas y minimalistas. En el ámbito local destacan Gonzalo Fernández (1994), Carlos Uriarte (1997, 1999) y Eduardo Pesce (2005).

Luego de la crisis del discurso del tratamiento resocializador (y cualquier variante de las ideologías *re-*) se hace patente que el encierro es malo *per se*, estructuralmente, y que forma parte del problema y no de la solución.

Osvaldo Vázquez (2012) detalla, al tiempo que sistematiza, «Las 10 consecuencias de la privación de libertad» en los adolescentes, de la siguiente manera:

- Desarrollan conductas psicopáticas, ligadas a la conformación de una coraza caracterológica. Esta coraza no permite que los adolescentes privados de libertad mediaticen los estímulos del medio a través de la movilización del mundo afectivo, valórico y cognitivo personal.
- Los trastornos de la vivencia y la expresión de la emocionalidad, caracterizada principalmente por una diferencia afectiva, les posibilita enfrentar y protegerse del sistema carcelario, pero no les permite percibir las reacciones emocionales personales ni el sufrimiento ajeno.
- Se trastorna la capacidad de mediatizar la calidad y la intensidad de la respuesta emocional según elementos objetivos del entorno.
- El joven aprende a desarrollar vínculos superficiales y manipulativos con su medio.
- Todo sistema carcelario se basa en la promoción de la pérdida de la individualidad y la autonomía. En este sentido, las respuestas y reacciones de los adolescentes a los estímulos se basan en la ausencia de una diferenciación subjetiva, lo que redundará en una alta vulnerabilidad al entorno carcelario.
- La experiencia carcelaria provoca una pérdida de la noción espaciotemporal. Esto implica la vivencia continua del *aquí y ahora*, lo que deteriora gravemente la capacidad de desarrollar aspectos cognitivos relacionados con la proyección vital, la de-

finición de metas y el análisis de consecuencias de las propias acciones en un sentido vital más amplio.

- Se favorece la impulsividad y la intolerancia a la frustración.
- La pérdida de la cercanía de la familia y de otras figuras adultas o pares significativos potencia aún más que el adolescente termine la construcción de su identidad a partir del contexto carcelario.
- Los efectos de la privación de libertad son altamente nocivos para el desarrollo de aspectos esenciales de esta etapa vital, como la construcción de identidad y la integración social positiva.
- Tales efectos provocan reacciones de frustración, con un aumento progresivo de conductas violentas en el enfrentamiento al entorno, lo que favorece la consolidación de una identidad delictual.

Las prácticas de encierro no resocializan sino que desocializan, estimulan las conductas violentas y desentrenan para la vida en sociedad y en comunidad.

Ante esto, el consenso experto fue cerrando filas en torno al convencimiento de los efectos perjudiciales del encierro, en particular cuando este se lleva a cabo en una etapa formativa de la vida. Se termina de consolidar el principio de subsidiariedad de la privación de libertad y la opción por las alternativas.

[Esta opción debe] ser comprendida dentro de la discusión actual acerca del sentido y los límites de la pena estatal.

[...] En ese marco, el ya clásico «derecho penal mínimo» o garantismo penal surge como la única alternativa posible para justificar en nuestras sociedades la administración de los conflictos violentos mediante reacciones estatales coactivas.

[...] Es a partir de esa idea que, por lo menos en teoría, en América Latina [...] se han diseñado y se están implementando sistemas que dan respuesta a las infracciones penales cometidas por adolescentes del modo más activo y menos reactivo posible. (Beloff, 2008, p. 179)

En suma, el diseño de las medidas alternativas a la privación de libertad comportaría ventajas de puro diseño desde el principio. Al tratarse de medidas que se implementan en el medio comunitario, evitan la violación de los derechos humanos que suele producirse en las instituciones de encierro (y que varios autores consideran rasgos inherentes a las instituciones totales), lo que reduciría notablemente los niveles de violencia; evitan la desocialización o la socialización inconveniente, producto del montaje de las condiciones artificiales de las instituciones de secuestro; evitan la iatrogenia institucional y la inscripción de los jóvenes en trayectorias delictivas, y, por último, permiten trabajar la responsabilización por la infracción en un encuadre legitimado.

Lo que dicen los datos

En el período considerado, la institucionalidad encargada de la atención de los adolescentes con medidas judiciales dispuestas por la justicia competente cambió de nombre en varias oportunidades. El Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (INTERJ) se convirtió en Sistema de Ejecución de Medidas sobre Jóvenes en Infracción (SEMEJI), luego en Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) y actualmente es el Instituto de Inclusión Social Adolescente (INISA), luego de vetar al INCCA. Identificar los marcos criminológicos, los discursos y la correlación de fuerzas detrás de estas sucesivas *colonizaciones semióticas* constituiría un estudio en sí mismo. En este apartado se hablará genéricamente del *sistema* para referir a la institucionalidad.

En el gráfico 1 se presenta la evolución de la cobertura del sistema en todo el país entre 2005 y 2015, en número de adolescentes con sanciones judiciales, a partir de los datos aportados por el Sistema de Información para la Infancia (SIPI) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Gráfico 1. Evolución de la población total por año. 2005-2015

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por SIPI.

El número corresponde a la cantidad total de adolescentes atendidos por disposición de la justicia competente desde el 1.º de enero hasta el 31 de diciembre de cada año.

Como se puede apreciar, desde el 2006 hasta el 2013 el crecimiento fue sistemático y sostenido, y a partir de ese año comenzó a registrarse un leve decrecimiento.

Cuadro 1. Variación del sistema de respuesta

Año	Valores índice		Δ
2006	600	100	0
2007	51	108,5	8,5
2008	897	149,5	49,5
2009	1237	206,2	106,2
2010	1699	283,2	183,2
2011	2214	369,0	269
2012	2443	407,2	307,2
2013	2880	480,0	380
2014	2804	467,3	367,3
2015	2654	442,3	342,3

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por SIPI.

Gráfico 2. Evolución de la población por año según tipo de medida, 2005-2015

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por SIPI.

El cuadro 1 permite dimensionar, mediante la construcción de números índice, la variabilidad del sistema de respuesta a las infracciones de adolescentes, tomando como base 100 el año 2006. Como se observa, el mayor valor corresponde al 2013, con un incremento en el orden del 380 %.

En el gráfico 2 se presenta la evolución de la población según el tipo de medida.

A lo largo de la década, las medidas no privativas de libertad jamás superan a las medidas con privación de libertad, lo que significa que nunca se cumplió con el principio de subsidiariedad de la privación de libertad. El año 2012 destaca por el acercamiento de ambas evoluciones, cuando las medidas alternativas casi equiparan a las privativas de libertad, pero en los años siguientes vuelve a aumentar la brecha que las separa.

Lo que dicen los actores

Para complementar el relevamiento, se hicieron varias entrevistas a operadores sociales y jurídicos en su calidad de informantes calificados. Entre los operadores sociales se entrevistó a educadores y trabajadores sociales que se desempeñan en proyectos de medidas no privativas de libertad. Entre los operadores jurídicos fueron entrevistados fiscales, defensores y jueces de adolescentes.

A continuación se comparten algunos ejes que surgen del análisis de las entrevistas.

Adhesión doctrinaria

En materia doctrinaria las opiniones son prácticamente unánimes: la mayoría de los operadores judiciales y sociales adhieren a la *doctrina de la protección integral*, apuestan por su aplicabilidad y vigencia, en particular del principio de subsidiariedad de la privación de libertad. De la misma manera coinciden en señalar la sobrevivencia, en múltiples aspectos, de la doctrina de la situación irregular.

En primer lugar, algunos actores señalan la propia *letra* del Código, con la que no se llegó a un modelo unívoco de protección integral sino que contiene varios pasajes híbridos, así como vacíos que contribuyen a esa sobrevivencia del enfoque tutelar. En segundo lugar mencionan la falta de reglamentación que paute el *cómo*, aportando criterios de aplicabilidad. Por último refieren a las propias actuaciones de los operadores.

[...] en la confusión existente. El Código es un producto negociado y creo que en la construcción política muchas cosas se colaron, muchas incoherencias, cosas inconexas, que tienen que ver con el resultado de lo posible, producto del negociar. Después tenemos las inconsistencias. El *cómo* no encastra. Y a eso le sumás

la mirada de quien tiene que hacer la aplicación de eso; depende de cada quien cómo lo va a aplicar. (Operadora social 3, comunicación personal)

El código tiene contradicciones. ¿Por qué? Porque no ha definido claramente frente a qué derecho estamos. [...] Hay normas muy contradictorias. Ahí están las contradicciones, porque no está muy claro. Si eso a nivel de especialistas de derecho internacional no está claro, imaginemos lo que es a nivel de parlamento nuestro, donde, pese a algunas insistencias nuestras en algunos puntos, les cuesta modificar. (Operador jurídico, juez 1, comunicación personal)

Se señala para el caso uruguayo la ausencia de una *vacatio legis* que se puede encontrar en los procesos de otros países, claramente en España, por ejemplo. La *vacatio* consiste en un período de puesta a prueba y ajustes de la aplicación de la nueva normativa. Es una suerte de período de gracia para la incorporación de modificaciones en función de la puesta en práctica, que en opinión de este entrevistado habría facilitado enormemente la implementación.

A nosotros se nos tiró un Código encima, lleno de contradicciones; nos costó muchísimo y, bueno, lo pudimos aplicar. (Operador jurídico, juez 1, comunicación personal)

A estas contradicciones y vacíos del «pantanal filosófico» se agrega, en la opinión de algunos entrevistados, la inexistencia de reglamentación, que permitiría en parte reducir las ambigüedades mediante la aportación de un marco interpretativo para la aplicación y sus «detalles».

Nosotros tenemos ley, y no tenemos reglamentación, o sea, tenemos una falla. Comparado con otros sistemas de otros países, existe esa reglamentación que facilita la aplicación, porque el juez sabe lo que está disponiendo y el alcance de eso. Nosotros tenemos una definición muy general [...]. Y cada medida tiene su reglamentación, porque eso permite ir al detalle, ir a qué pasa con la medida, qué significa cada cosa. (Operador jurídico, Juez 1, comunicación personal)

Por último, los entrevistados identifican elementos de situación irregular en las actuaciones. Aquí es posible observar un discreto *fuego cruzado* entre operadores sociales y jurídicos. Los primeros refieren elementos tutelares en la actuación de los magistrados, en tanto los segundos encuentran estos elementos concentrados en las prácticas de los operadores de los proyectos, quienes, según refieren, indiscriminan y pegotean plásticamente políticas sociales con políticas criminales.

La famosa tensión entre derecho penal de acto y derecho penal de autor

—¿De qué depende que un joven lleve medidas privativas o no privativas de libertad?

—De la gravedad y, aunque también es muy discutible, los antecedentes, pero incluso yo ya he visto que se ha hecho así con una rapiña; si es la primera tal vez por ahí podés ponerle medidas no privativas de libertad, pero si ya tiene una o dos, va a ser difícil, salvo que sea una cosa muy boba, va a ser muy difícil que no le pongas privativa de libertad. Si ya tiene antecedentes... Bueno, porque de alguna manera hay que ir frenando la cosa. Eso es muy discutido porque se está implementando la famosa discusión de lo que se llama *derecho de autor* y *derecho de acto*. Lo que pasa es que es el principio de realidad de la vida: si un tipo te falla 25 veces a vos, ya sabés que está para la joda. (Operador jurídico, juez 2, comunicación personal)

La *famosa discusión* es un debate histórico entre los operadores jurídicos y remite directamente al cambio de paradigma. En este punto es posible observar tres situaciones: jueces que se posicionan doctrinariamente en derecho penal de acto, otros que se ubican en derecho penal de autor y otros en una concepción diferente, de penal de acto con ingredientes de autor, pero integrados en una postura de benignidad de las penas, en orden a la protección integral.

Muy sumariamente, se puede afirmar que el derecho penal de acto supone juzgar al sujeto por un comportamiento (acción u omisión) que produjo un daño o puso en peligro de un bien jurídico protegido por la ley. Se sanciona al individuo por lo que hizo, o por lo que no hizo y debería haber hecho.

En el derecho penal de autor, en cambio, se juzga al sujeto por su forma de ser, el tipo de vida que tiene, su personalidad. En este caso lo reprochable sería la personalidad y no el acto.

Este derecho penal de autor, que ha sido el históricamente aplicado en materia adolescente desde 1934, lleva directamente al corazón del enfoque de la rehabilitación: se busca conocer las causas últimas que lo llevaron por la *pendiente del crimen* y actuar sobre esas causas. No interesa centrarse en la infracción, en el hecho cometido, más que como *síntoma* de situaciones más profundas. Luego, las intervenciones sociotécnicas se realizan en orden a modificar la personalidad del individuo.

La base para una conducción correcta del proceso y la posterior decisión es, por ejemplo, la aprehensión conforme a la realidad de la personalidad del autor. Pero en este terreno el jurista es un lego, al que le falta el necesario conocimiento es-

pecializado, aun tratándose del más experimentado juez para jóvenes, que pusiese toda su buena voluntad para entender al joven y que no viera en él solo al autor de un delito. Para ello necesita la colaboración de especialistas formados en las ciencias humanas, respecto de lo cual queda por resolver cuánto ha de intervenir el psiquiatra o el psicólogo. (Kauffman, 1983, citado en De Martino y Gabin, 1998)

Se invita a la escena a otras disciplinas para poder conocer la *peligrosidad* del sujeto y así contar con capacidad de pronosis. Así, en esta situación al sujeto se lo juzga no solo por lo que hizo, sino por lo que podría llegar a hacer, por su virtualidad. Esa virtualidad trae al juzgamiento el acto en sí por el cual el adolescente es capturado por el sistema, pero también —y captando aún más la atención— el pasado y el futuro potencial. (¿Volverá a hacerlo? ¿Volverá a delinquir? ¿Cuán peligroso es?)

Las prácticas de justicia organizadas en torno al derecho penal de autor redundaron en abrumadoras internaciones por tiempo indeterminado. Jueces y operadores preocupados por la *continentación* de jóvenes en situación irregular, sin padres, sin familia o sin presencia de referentes adultos, sin trabajo, sin estudio... dejaron en evidencia las microcapilaridades de la criminalización de la pobreza.

Un ejemplo precódigo:

G. I. estuvo internado en La Tablada por robar ropa de bebé y bombones Garoto en una tienda. El diagnóstico de los técnicos, psicólogo y asistente social, daba cuenta de una familia incontinente, desestructurada, en condiciones de pobreza extrema y sin capacidades para sostener («continentar») al muchacho. Resultado: Por esta infracción el adolescente estuvo privado de su libertad por un período de cuatro años y medio, prácticamente cinco años, desde principios de 1988 hasta fines de 1992.

V. M. es un adolescente que con arma de fuego mató a quemarropa a un joven de 18 años un sábado de noche, en un baile. A raíz de un incidente puntual en el baile —antes no se conocían—, sacó el arma y le disparó en medio del pecho. La víctima no portaba armas. Los informes psicosociales referían la pertenencia de V. M. a una familia trabajadora, integrada, de clase media-baja y, por ende, con capacidades para sostener procesos. Resultado: Por este homicidio el adolescente estuvo privado de su libertad tres meses (1992).

Estas prácticas típicas de la doctrina de la situación irregular, que no discriminaban entre la búsqueda de soluciones a problemas sociales y la respuesta penal, llevaron a naturalizar el quebrantamiento del principio de proporcionalidad. De tal modo, se tornó de uso implementar sanciones descomunales para actos irrelevantes y sanciones irrelevantes para actos gravísimos, en el marco de la teoría de la continentación.

En la esfera el derecho penal es donde se ha hecho el mayor esfuerzo de racionalidad; medir la pena, hacerla proporcional a la falta, aproximar cada vez más la equivalencia entre la escala de la culpabilidad y la de la pena: todo esto es claramente obra del entendimiento. El entendimiento mide, y lo hace por medio de un razonamiento de proporcionalidad del siguiente tipo: la pena A es a la pena B lo que el crimen A' es al crimen B'. Afinar sin cesar este razonamiento de proporcionalidad es la tarea entera de la experiencia jurídica bajo su forma penal. (Paul Ricœur, 2003, citado en Silva Balerio et al., 2008)

Sin embargo, en materia adolescente, durante décadas a los jóvenes se los juzgó en función de lo que tenían o, más precisamente, en función de lo que no tenían (una familia continente, inserción laboral, etcétera).

A partir de la aplicación del Código del 2004 (ley 17.823) se despejó claramente el principio de legalidad:

Yo soy juez penal, de delitos; soy juez de delitos, no soy juez para tratar las situaciones de los muchachos que están en la calle, ni tampoco para tratar las situaciones de los que están desamparados por la familia. (Operador jurídico, juez 2, comunicación personal)

Hay en los jueces entrevistados un claro posicionamiento respecto al principio de legalidad/tipicidad: son jueces en materia penal. Igualmente, expresan sentirse desafiados cuando se les presentan situaciones de omisión de políticas sociales, situaciones de consumo problemático de drogas, presencia de enfermedades crónicas, situaciones de calle, etcétera. Pero rápidamente despejan en sus discursos el alcance de las competencias, separando la arena de las políticas sociales de la arena de las políticas criminales.

Un entrevistado hizo un sugestivo señalamiento respecto a la ausencia de dispositivos especializados para atender situaciones específicas de «primeras violencias», aquellas en que no llega a configurarse un delito pero anuncian una escalada de problemas si no se da respuesta a las primeras demandas:

[...] que hubiera un lugar intermedio para tratar aquellos casos que no son delito pero que en la situación está corriendo mucho riesgo él, por su conducta o por su manera de actuar. (Operador jurídico, juez 2, comunicación personal)

Esta es una debilidad constatada en la matriz de políticas de protección, «algo debería hacerse», pero con el nuevo paradigma queda claramente planteado que no será mediante las competencias de los juzgados penales de adolescentes. No es materia penal ni policial. En opinión de este entrevistado, no corresponde, aunque señala la

ausencia de dispositivos adecuados para atender estos casos. Similares demandas habían sido planteadas por operadores sociales de proyectos barriales y, en particular, de proyectos de atención a niños en situación de calle con enclave territorial, tanto oficiales como en modalidad de convenio con organizaciones de la sociedad civil.

Actualmente, ¿qué es lo que define los juicios de los jueces? ¿Con base en qué criterios juzgan?*

[...] la gravedad del hecho, pero si es un tipo que tiene muchos antecedentes, para mí sí, precisa algo más para buscar una corrección de su conducta. Así que ya te digo, la gravedad y también las circunstancias del hecho; es decir hay hechos que son fútiles, que son bobos, que no hay gran..., que se recuperan las cosas, en las tentativas por ejemplo. Incide también... Yo valoro todo; valoro el monto, los antecedentes, valoro las circunstancias personales, de repente si está en un estado de drogadicción y no es una cosa muy grave. Pero te quiero decir que uno nota que el drogadicto no puede ni consigo mismo muchas veces; lo tomo como que no es lo mismo uno que tiene clarita la mente, que premeditó todo, hizo todo. Entonces tomo en cuenta muchísimas cosas para decidir una medida privativa o no privativa de libertad, en el entorno de eso, pero más que nada te digo eso: si tiene antecedentes y la gravedad del hecho. (Operador jurídico, juez 2, comunicación personal)

Acto en primer término, gravedad, antecedentes, circunstancias. Este entrevistado se ubica doctrinariamente en derecho penal de acto (es lo que *debería* ser), pero reconoce que luego las prácticas se deslizan en otras direcciones.

Por su parte, otro juez entrevistado se posiciona y argumenta a favor del derecho penal de autor, entendiendo que en ello radica la especificidad de la materia adolescente, lo que diferencia este derecho del penal de adultos.

—Para nosotros es más el derecho penal de autor, porque una misma rapiña se puede sancionar de diferente manera según sea el autor. Si tiene padres, si no tiene padres, situación diferente en que se cometió la rapiña; se ve más acá el derecho penal de autor que de acto.

—¿Las características del joven importan?

—Importan más, importan las características del joven. [...] no es a favor ni en contra del joven. No es ni mejor ni peor. Es atendiendo a su situación personal. (Operador jurídico, juez 3)

En esos casos, por ejemplo, no ameritaría la internación. Lo que pasa es que muchas veces la internación se hace porque no hay quién se haga cargo de ese chi-

quilín, porque no hay un padre o una madre. El padre está preso o la madre está presa. A veces hay alguna tía o algo, pero a veces no hay. Entonces tenés que internarlo por razones de, digamos, necesidad, porque en otras circunstancias no lo internarías. (Operador jurídico, juez 3, comunicación personal)

Para este entrevistado, las características del joven son las que «importan más» a la hora de dictar sentencia y definir la privación o no de libertad. También las toma especialmente en cuenta para definir las sustituciones de medidas.

Bueno, hay casos en que no tienen padre o familia que los reclame y no los pueden entregar a nadie, y entonces, como no hay padre ni madre ni tía ni abuela ni nadie que se ocupe, cumplen todo en internación. Eso es un 10 %, chicos que están un poco..., los que están en situación de calle [...]. (Operador jurídico, juez 3, comunicación personal)

Doctrina de la situación irregular, pura y dura.

En tanto, otro juez entrevistado, afirmó prácticamente lo contrario:

Sin duda, primero, a mí no me cabe ninguna duda, hay que separar la personalidad del acto. La persona se juzga en un estado de derecho por lo que hizo, no por lo que es; no se juzga por su situación sino por lo que hizo. ¿Qué hizo? ¿Un hurto? Estamos juzgando un delito que tiene determinadas características. ¿Cometió una rapiña? Estamos juzgando una rapiña. Y la respuesta tiene que ir en relación con eso; no solo con eso, pero con eso en primer ratio. Después analizaremos otra cosa. Ahora, cuando analizamos su situación —que además la norma lo dice, y ahí un poco puede venir la confusión—, las circunstancias del individuo... Es el acto el límite, la respuesta en relación con el acto; ahí marcamos un límite. ¿Qué quiere decir? Que no podemos aplicar mayor sanción que la que corresponde por ese acto. Ahora podemos morigerar o disminuir la sanción teniendo en cuenta las circunstancias; o sea que sí hay una consideración eventual más allá del acto, pero nunca va a ser para agravar la pena, sino para disminuirla, desde otra perspectiva. O sea, en ese sentido se toma en cuenta, pero solo en ese sentido. El acto marca el tope. (Operador jurídico, juez 1, comunicación personal)

El acto en primera ratio; luego se observan otras cosas. El acto marca el límite superior de la intervención punitiva, en tanto las características de personalidad pueden incidir, pero, al contrario de las aplicaciones históricas, pueden hacerlo solamente en el sentido de reducir la sanción. Cuando los límites a la intervención punitiva son

impuestos por el acto y no por las necesidades educativas, se introducen pautas de certeza más eficientes en orden a garantizar derechos (Uriarte, 1999).

El resto de los operadores jurídicos, tanto defensores como fiscales, consideran que debería aplicarse un derecho penal de acto, pero sigue rigiendo el derecho penal de autor. Esta opinión es igualmente compartida por los operadores sociales.

Ahora bien, esta tensión histórica de acto/autor no parecería resolverse con la sola definición y adhesión doctrinaria. Por ejemplo, un operador jurídico que se adscribe enfáticamente al derecho penal de acto (lo afirma antes de que se le pregunte) opina que el joven debe ser juzgado estrictamente en función de sus acciones:

Qué fue lo que hizo y nada más. Todo lo que sea excluyente de una responsabilidad objetiva y clara es doctrina tutelar.

En este caso extremo ni siquiera entraría *lo que hizo antes*, porque para este entrevistado tampoco se tienen que considerar los antecedentes. Sin embargo, a la hora de pedir los informes técnicos demanda a los equipos profesionales que consignent características de personalidad, correspondientes al derecho penal de autor. Son tantos años en que todos los instrumentos y dispositivos estuvieron al servicio del derecho penal de autor que no se dispone de herramientas con las que operativizar un derecho penal de acto.

Trabajo con las familias:

Cuando Caín mató a Abel, ¿dónde estaban los padres...?²

Con respecto a la dimensión de trabajo con las familias de los adolescentes con medidas no privativas de libertad, existen distintas posturas frente al tema según el proyecto, e incluso según la etapa del proyecto.

Una postura, que fue quedando por el camino (varios entrevistados explicitaron esta evolución), planteaba la necesidad de no trabajar con la familia, porque ello *expandía* la criminalización. Desde ese lugar se argumentaba que la *medida* es del joven y para el joven, por lo que no correspondía involucrar a la familia en lo que se interpretaba como una extensión de la intervención punitiva.

El rango actual de las opiniones se distribuye desde los partidarios de dosificar las visitas a demanda o debidamente justificadas para no incurrir en excesivas *invasiones* al espacio familiar, hasta los que plantean penalizar la falta de respaldo o compromiso de los adultos a cargo. Las posturas más *duras*, por así denominarlas, se concentran en los operadores jurídicos, quienes también devuelven las representaciones e

2 La frase se atribuye a Salvador Minuchin.

imágenes más disminuidas de los familiares en cuestión: «padres superficiales»; «padres irresponsables»; «madres que... son madres de esos chicos».

Un operador jurídico plantea generar la figura de responsabilidad penal para los padres que no se hagan cargo e incurran así en el delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad.

[...] que se legisle [...] eventuales sanciones para los padres incumplidores cuando les entregan a sus hijos y tienen que tomar medidas sobre ellos. Si el padre se compromete a mantener al chiquilín en la casa en la noche y si el chiquilín no cumple, denuncia esa situación inmediatamente ante el juez y, bueno, tenés un mecanismo hasta más seguro (Operador jurídico, Ministerio Público, comunicación personal)

Igualmente, entre los operadores sociales es posible percibir cierto cambio en los niveles de tolerancia del otrora comprendido *yoyano* («Yo-ya-no sé qué hacer con él»). Esto se podría interpretar como un relativo endurecimiento con respecto a las exigencias a los padres o referentes adultos.

Lo que no cierra de la medida abierta

«Ir a firmar»

Todo el desarrollo del trabajo presentado por el educador referente en cuanto a la aplicación de instrumentos socioeducativos para el diseño de un *plan singular* a la medida del adolescente, en el que se pauten acuerdos, se promueva la realización de actividades acordes a su etapa vital y se trabaje la responsabilidad por la infracción, es resumido por los adolescentes del siguiente modo: «Voy a firmar».

Es que, las libertades asistidas, según los adolescentes, son las medidas en las que «tenés que ir a firmar». Del amplio abanico de contenidos desplegado por los educadores y referentes, ellos se quedan con eso: «ir a firmar».

—Hoy por hoy las ONG a las que los chiquilines concurren, en general, cuando vos los interrogás, te comentan, y estamos unos 20 minutos conversando, y que te preguntan, y me dicen si yo me he dado cuenta que por este camino no debo, pa, pa, pa. Esas conversaciones que el individuo puede desplegar en las ONG a las que concurre, ellos le llaman *ir a firmar*. Ponele que sea de una hora, mientras estemos en el aspecto verbal [...]! (Operador jurídico, Ministerio Público, comunicación personal)

—¿Qué le pediría a una medida para que fuera confiable?

—Que no sea así como dicen ellos: «Ah, tengo que **ir a firmar**». ¡Que no sea eso! (Operador jurídico, juez 2, comunicación personal)

La devolución que te hacen es totalmente superficial. El cumplir la medida es nada más que ese tiempo que fueron y *firmaron*. No hay una devolución definitiva (Operador jurídico, Ministerio Público)

A una la frustra un poco, porque una está meses, y horas y horas con las familias, y una cosa así y te dicen: «Bueno, hay que ir a firmar». ¡Te querés matar! Pero igual tampoco da cuenta de nada, porque de repente hizo un laburo preciosísimo y, bueno, ta, sigue diciendo *ir a firmar*, aunque sabe que hace más cosas. Uno le explica que lo que firma son los boletos y demás. (Operadora social 2, comunicación personal)

Los operadores sociales son los primeros en señalar lo frustrante de esta traducción, que pauperiza totalmente la propuesta del programa. El grueso del trabajo socioeducativo se desarrolla en el «aspecto verbal» y la técnica con la que trabajan es, básicamente, la entrevista. Esta metodología de trabajo no resulta convincente para los operadores jurídicos y constituye el blanco de numerosas críticas (*medidas superficiales, que no hincan el diente, no trabajan en serio, palabras que se lleva el viento, inacción completa*, etcétera).

¿Las medidas no privativas? Yo creo que, hoy por hoy, las medidas no privativas tienen una superficialidad enorme. Si les llegamos a preguntar a los chiquilines, en general es una superchería muy grande. (Operador jurídico, Ministerio Público, comunicación personal)

Bueno, para los chiquilines, que son más vivos que nosotros, es facilísimo decir: «No, yo no voy a hacerlo más». «¿Y por qué está mal?» «Está mal porque esta persona no merece...» Pero ese proceso verbal queda ahí, en el agujero negro, de inmediato. Hoy por hoy las ONG están trabajando *en esos niveles de verbalización*. No tienen, obviamente, muchos más elementos. (Operador jurídico, Ministerio Público, comunicación personal)

Son *la inacción* completa; o sea, no hicieron nada más que mantener entrevistas y ta. Entrevistas donde el gurí viene y relata las cosas y nada más. (Operador jurídico, abogado defensor 1, comunicación personal)

Por su parte, el relato de los operadores sociales transmite la energía que ellos ponen en esos *niveles de verbalización*; dan cuenta de las horas de conversación, de la

paciente configuración del vínculo, del lento establecimiento del *rapport* educativo, de las dificultades para lograr diminutos cambios que traducen enormes logros. En el endogrupo se entiende rápidamente: un reconocimiento de causa, el cumplimiento de un acuerdo, la asistencia con puntualidad, el sostenimiento de una actividad se constituyen en enormes victorias en el marco del trabajo con estos jóvenes. Visto desde fuera, ¿qué es?, ¿qué se ve?, ¿qué se transmite? Nada, o casi nada. Pequeños-grandes cambios, solo perceptibles para el *ojo entrenado*. Pero ¿cómo se comunica esto a los ojos no entrenados, a los *extranjeros* del oficio socioeducativo? Solo funciona en el endogrupo.

Y en particular, ¿qué resultados objetivables arroja? El concentrado queda en un nivel muy íntimo, muy privado, que no objetiva ni comunica... De allí las enormes dificultades históricas para la construcción de indicadores que esta área ha tenido.

Pero además, la perspectiva del joven tampoco colabora. Por ejemplo, uno de los jóvenes entrevistados, a seis meses de estar participando en una medida no privativa por una sustitución, no podía explicar de qué se trataba. Ellos van y *hacen* lo que les dicen. Siguen la flecha. (Es que... cualquier cosa es mejor que estar encerrados).

En el trabajo con los jóvenes, los educadores hablan de *entrevista inicial de encuadre*, en la que se intenta aportar elementos para que puedan entender lo que les está pasando y así colaborar con la construcción de un *relato*. Resulta sorprendente ver cómo los jóvenes transitan por las medidas, sin enterarse de lo que les está pasando. Muchos de los jóvenes no entienden cómo salió su juicio, no identifican quién era el juez, quién el fiscal, quién su abogado defensor, así como tampoco se enteran de la sentencia y de qué va la sanción.

Muchas veces se explica porque no se entiende, no se entiende ¡y no se entiende! Cuando hacía el control de arrestos domiciliarios, yo llegué a hacer hasta *roleplaying*: hacía de juez, de la defensora, del fiscal, porque los chiquilines... Me acuerdo de una chiquilina, puntualmente, que pensaba que iba a ir a la audiencia y le iban a dar un trabajo, ¡cuando le iban a dar una sentencia!

[...] Y hay gurises que están convencidos de que les van a dar trabajo, y son gurises que han pasado un montón de veces por el sistema penal pero todavía no conocen el discurso, porque no se les explica, yo qué sé...

En audiencias he parado cuando miraba la cara del chiquilín y era como ¿*qué están diciendo?* «Fulano, ¿estás entendiendo?» «No.» «Señor juez, ¿le puedo explicar?» «Y explíqueme.» Porque de eso se trata. Y en general no saben. Y entonces no saben qué medida se pidió. Bueno, uno les lee todo, se les explica la modalidad de trabajo, se les presenta el equipo de trabajo, los tiempos, cuál va a ser justamente el canal con el Poder Judicial, les explicamos claramente las responsabilidades y los derechos. (Operadora social 2, comunicación personal)

El tema de las diferentes lecturas, las distintas comunidades de significado y la (in)comunicación también comprende a los operadores jurídicos.

El incumplimiento

Un magistrado plantea abiertamente que las medidas no privativas de libertad no le han dado resultado. Y llega a esta afirmación concluyente por la experiencia negativa que tuvo con los incumplimientos. Con aproximadamente año y medio en ejercicio en materia adolescente, relata que en sus inicios disponía profusamente medidas no privativas, pero *se le iban todos*.

En esta oportunidad, un juez predispuesto inicialmente a la aplicación de medidas no privativas termina *bajándolas de cartel* por lo que entiende implementaciones de baja implicación. Lo que este operador demanda es que, cuando el joven desiste, haya un seguimiento por parte del proyecto que debería hacer un «intento más severo».

[...] soy partidario de poner privación de libertad en el arranque y tratar de que cumpla la mayor parte del tiempo en privación de libertad y que salga dos o tres meses a cumplir la libertad asistida, [...] entonces cumplen mejor. Porque cuando uno pone [medida no privativa] desde el arranque, pasa que la mayoría de las veces no se cumple.

El ensayo y error lo fue llevando a privilegiar las medidas privativas de libertad.

La insoportable levedad de la medida

Por último, se hacen explícitas las razones ideológicas. Sin dudas y en primer lugar, la falta de contundencia, de presencia inobjetable del castigo. Las medidas no privativas aparecen como un castigo demasiado *light* para las demandas de punición de la ciudadanía y su nueva sensibilidad (Garland, 1999).

Todo lo que está pasando ocurre porque hay una falta de sinceramiento, estamos con unas hipocresías verbales. Las medidas socioeducativas son aflictivas. Entendiendo que son aflictivas, después determinemos qué grado de aflicción. Pero las medidas esas *no son para premiar al niño*. Bueno, *y se entiende que las medidas no privativas de libertad son una especie de premio*, son una especie de estímulo. (Operador jurídico, Ministerio Público, comunicación personal)

A la medida no privativa le falta la contundencia que le sobra a la privación de libertad. No se ve cómo es que el adolescente *está pagando* lo que hizo; se diluye el componente retributivo y de aflicción.

Por su parte, los adolescentes lo perciben de una manera muy diferente, con presencia clara del componente aflictivo:

—Para mí es una penitencia. ¡Penitencia!, porque es una transa venir acá. (Adolescente, mujer, 13 años, comunicación personal)

—¿Y qué es lo que más te gusta de una libertad asistida?

—Nada. (Adolescente, mujer, 13 años, comunicación personal)

A modo de cierre

El sistema penal adolescente registra sólidos avances en lo que refiere al respeto del principio de legalidad/tipicidad, así como en la separación entre las arenas de las políticas sociales y las políticas criminales, lo que se traduce en un sistema más garantista que el previo al 2004.

Pero no se concreta el respeto al principio de subsidiariedad de la privación de libertad ni su utilización como medida de último recurso y por el período más breve que proceda. Esta medida sigue registrándose como la opción preferencial de los magistrados a la hora de dictar sentencia.

Con pocas excepciones, esa preferencia es acompañada por el resto de los operadores jurídicos entrevistados, quienes básicamente la explican por razones ideológicas. La medida no privativa no tiene la contundencia que le sobra a la privación de libertad y se presenta como un castigo muy liviano para las demandas del neopunitivismo actual (Garland, 2007).

A pesar de la mayoritaria adhesión filosófica y doctrinaria al derecho penal de acto, los entrevistados reconocen un funcionamiento de la dinámica judicial que sigue organizándose en torno a un derecho penal de autor.

En este sentido, a pesar de la relativa instalación de un esquema de progresividad sancionatoria en el plano conceptual, se verifican pocos avances en el respeto del principio de proporcionalidad.

Las medidas no privativas presentan serias debilidades organizativas y de gestión que han quedado expuestas. En particular, los proyectos pagan un precio caro por el déficit de un sistema claro de monitoreo y evaluación. Lo pagan con importantes pérdidas de prestigio y legitimidad. Las opiniones vertidas por los operadores jurídicos entrevistados dejaron claramente explicitada la desconfianza.

La propuesta de trabajo no resulta clara para los adolescentes participantes, ni tampoco suele serlo para sus familiares. La reducción de la propuesta a la expresión *ir a firmar* transmite en el mensaje una aparente burocratización que desjerarquiza a la medida no privativa.

Las debilidades de diseño contribuyen a la imagen de medidas *superficiales* según la percepción de los operadores jurídicos. Los proyectos deberán combatir la *superficialidad* de las medidas con profundización metodológica y robustecimiento de los instrumentos y dispositivos. Trabajar estos aspectos será clave para revertir la desconfianza del sistema judicial hacia las medidas no privativas de libertad y hacer realidad el principio de que la privación de libertad sea efectivamente empleada como medida de *último recurso*.

El análisis de este estudio se situó a nivel meso y micro, atendiendo a los programas de implementación y a los actores involucrados. Esta opción no desconoce la influencia determinante de los factores macrosociales y los empujes del neopunitivismo actual, particularmente impulsado por el modelo sajón (y espectacularmente analizado por David Garland). Pero, a pesar de ello, se entiende necesario llevar a cabo estudios que permitan fortalecer elementos amortiguadores de esta embestida punitiva que no arroja buenos resultados en ninguna parte.

Los países que le *torcieron el brazo* a la criminalidad juvenil, como Irlanda y Bélgica, priorizaron la justicia restaurativa en sus reformas legales de 2002 y 2007 respectivamente (Dünkel, 2008).

El paradigma de la justicia restaurativa resulta particularmente idóneo para trabajar con adolescentes que han infringido la ley penal:

La justicia restaurativa es la forma más pedagógica de ejercer la justicia en el caso de los adolescentes, pues reconoce (y hace que el infractor reconozca) que el crimen causa daños a las personas y a la sociedad; reconoce los derechos de la víctima (fortaleciendo el sentimiento de realización de justicia en la propia víctima y en la comunidad en general); da protagonismo a la víctima y a la sociedad (permitiendo que se encuentre una respuesta efectiva al conflicto social generado por el crimen); trata las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro; repara daños; [...] hace menos daño al adolescente (por promover soluciones alternativas a la privación de libertad); previene la estigmatización del adolescente y finalmente promueve la reconciliación. (UNODC, 2004)

El modelo de justicia centrado en este enfoque ha dado lugar a varios matices y denominaciones: *justicia positiva, pacificadora, reparativa, reparadora, conciliatoria, restauradora, comunitaria*, entre otras (Mayorga, 2009). Más allá de las variantes, el elemento común que las caracteriza radica en que estas prácticas excluyen en su respuesta la privación de libertad y buscan sanciones alternativas al sistema tradicional.

Pese a las diferentes terminologías y expresiones que se utilizan para denominar el fenómeno restaurativo, es importante señalar que hay un elemento común en-

tre ellas y es el hecho de que este grupo de prácticas busca responder al delito de una forma diferente y menos punitiva que el sistema tradicional. (Mayorga, 2009, p. 8)

Las prácticas restaurativas utilizan fórmulas más constructivas que el sistema retributivo tradicional, al conjugar elementos como la responsabilidad, la reparación y la integración social (Kemelmajer, 2004).

En su acepción restringida, el concepto de *justicia restaurativa* remite al de *justicia conciliatoria*, que comprende aquellas prácticas de justicia que involucran mediación y reparación del daño. En su sentido amplio, el concepto se acerca al de *justicia comunitaria*, que incluye todas aquellas sanciones que se implementan en el medio comunitario (lo que engloba todas las medidas no privativas de libertad: libertad asistida, libertad vigilada, medidas sustitutivas y servicio a la comunidad).

Las prácticas en este paradigma de justicia habilitan a los adolescentes a comprender las consecuencias de sus actos y a realizar acciones para «enmendar» las cosas, lo que a su vez les devuelve una imagen más positiva de sus personas. Obviamente este esquema no es aplicable a todos los adolescentes ni a todas las infracciones, pero, dados los parámetros de la criminalidad juvenil uruguaya, correspondería a una mayoría relevante.

Estas medidas son menos costosas y más efectivas. Los países que se pasaron a este esquema de justicia redujeron notablemente las infracciones cometidas por adolescentes.

En 2004 en Uruguay, la ley hizo una opción minimalista y restaurativa, a la que no se le dio tiempo ni oportunidad de ser aplicada. El sistema de respuesta sigue centrado obcecadamente en la privación de libertad y en el endurecimiento de las penas. ¿Por qué hacer lo mismo una y otra vez arrojaría diferentes resultados?

Bibliografía

- BÉCKER, H. (2018). *Outsiders. Hacia una sociología de la desviación*. 5.^a ed. Madrid: Siglo XXI.
- BELOFF, M. (2008). «Los nuevos sistemas de justicia juvenil en América Latina (1989-2006)». *Justicia y Derechos del Niño*, 9, 177-217.
- DE MARTINO, M. & GABIN, B. (1998). *Hacia un enfoque integral de la minoridad infractora*. Montevideo: Carlos Álvarez.
- DÜNKEL, F. (2008). «El futuro de la justicia juvenil: Tendencias europeas». *Revista Justicia y Derechos del Niño*, 10, 63-95.

- FERNÁNDEZ, G. (1994). «La función de la cárcel en el Uruguay de hoy». En *¿Un quehacer de todos?*, trabajo presentado en I Seminario sobre Cárceles. Montevideo, Uruguay.
- GARLAND, D. (1999). *Castigo y sociedad moderna: Un estudio de teoría social*. Madrid: Siglo XXI.
- GARLAND, D. (2007). *Crimen y castigo en la modernidad tardía*. Bogotá: Siglo del Hombre.
- GOFFMAN, E. (2001). *Internados*. Buenos Aires: Amorrortu.
- KEMELMAJER, A. (2004). *Justicia restaurativa*. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni.
- LEY 17.823 (2004). *Código de la Niñez y la Adolescencia*. Recuperado de https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/leyes/ley/17823?width=800&height=600&hl=en_US1&iframe=true&rel=nofollow.
- LIWNSKY, N. (1991). *Humanización Institucional*. Montevideo: CFEE.
- MAYORGA, M. (2009). *Justicia restaurativa. ¿Una nueva opción dentro del sistema penal juvenil? Incorporación de los principios restaurativos dentro del proceso penal juvenil costarricense*. Trabajo de tesis, inédito.
- PAVARINI, M. (1995). *Los confines de la cárcel*. Montevideo: Carlos Álvarez.
- PESCE LAVAGGI, E. (2005). *Derecho penal juvenil: Lineamientos para su formulación dogmática*. Montevideo: Carlos Álvarez.
- SILVA BALERIO, D., COHEN, J., TERRA, F. & BRUNET, N. (2008). *Límite al poder punitivo: Análisis de la aplicación del principio de proporcionalidad en el sistema penal juvenil montevideano*. Montevideo: UNICEF.
- SUTHERLAND, EDWIN H. (2009). *El delito de cuello blanco*. Buenos Aires: B de F.
- TENENBAUM, G. (2016). *Infracción y castigo. Los procesos de normalización para adolescentes con medidas en libertad en la Ciudad de México y Montevideo*. (Tesis de doctorado). México: El Colegio de México.
- UNODC (2004). *Hacia un nuevo paradigma: Miradas interdisciplinarias sobre modelos y metodologías. Justicia juvenil. Retos y perspectivas a nivel internacional*. Medellín: UNICEF.
- URIARTE, C. (1997). *El Uruguay de los 90: Entre políticas sociales y políticas criminales*. Montevideo: IELSUR.
- URIARTE, C. (1999). *Control institucional de la niñez y la adolescencia en infracción*. Montevideo: Carlos Álvarez.
- VÁZQUEZ ROSSONI, O. (2012). *Características psicosociales de la adolescencia. La privación de libertad y sus consecuencias*. Inédito.